



Corte Suprema de Justicia de la Nación

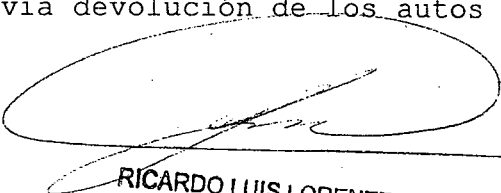
Buenos Aires, 26 de junio de 2012.


Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en la causa Repsol YPF GAS S.A. - Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Sociales y Viviendas El Bolsón LTDA. (Coopetel Leds) - Totalgas Argentina S.A. - Shell Gas S.A. s/ infracción ley 22.262", para decidir sobre su procedencia.

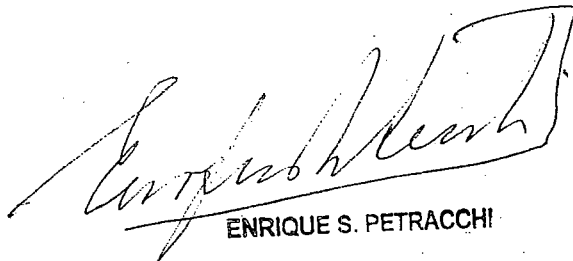
Considerando:

Que esta Corte comparte el dictamen del señor Procurador Fiscal y se remite a sus fundamentos y conclusiones por razones de brevedad.

Por ello, se desestima la queja. Declárase perdido el depósito de fs. 84. Notifíquese y, oportunamente, archívese, previa devolución de los autos principales.


RICARDO LUIS LORENZETTI


ELENA HIGHTON de NOLASCO


ENRIQUE S. PETRACCHI

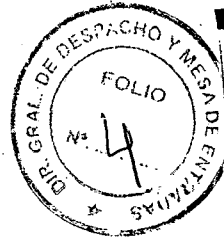

JUAN CARLOS MAQUEDA

HA HECHO FIRMAR Y CERTIFICAR
POR SECRETARÍA DE JURISPRUDENCIA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION

MARIA GUADALUPE ALFARO
AB. 1970
Tº 65-Fº 133 CPACF

Recurso de hecho deducido por el Estado Nacional Ministerio de Economía de la Nación, representado por el Dr. Bruno Gabriel Toia (letrado apoderado).

Tribunal de origen: Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, provincia de Río Negro.



S.C. R 884; L. XLIV.

Procuración General de la Nación

Suprema Corte:

I

Luego de la anterior intervención de V.E. en estos autos, publicada en Fallos: 330:2192, por la cual se dejó sin efecto la sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, provincia de Río Negro, revocatoria de las sanciones que la autoridad administrativa había aplicado a Repsol YPF Gas S.A., a la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos, Sociales y Viviendas de El Bolsón (Coopetel Ltda.), a Totalgaz Argentina S.A. y a Shell Gas S.A. por infracción a la ley 22.262, el tribunal *a quo* -con otra integración- dictó nuevo fallo y resolvió declarar extinguida la acción por prescripción, revocar la resolución n° 101/03 de la Secretaría de Coordinación Técnica del Ministerio de Economía y Producción -por la que se habían impuesto aquellas penas- y sobreseer a las sumariadas en orden a las conductas reprochadas.

Para así resolver, el *a quo* tuvo en cuenta la interpretación sobre la prescripción de la acción por infracciones a la ley 22.262 reprimidas con multa que efectuó el Alto Tribunal -con remisión a los fundamentos del dictamen del Procurador General- en el precedente de Fallos: 325:1702 y la inexistencia de causales interruptivas. De conformidad con esa inteligencia de la ley, consideró que la disposición de su artículo 35 -que establece el plazo de seis años para la prescripción de la acción penal- "sólo resulta aplicable a los delitos allí tipificados pero no a las infracciones sancionadas con multa, para las cuales -en ausencia de similar regulación específica en la ley- rige la norma general del Código Penal, esto es, el art. 62, inc. 5, en razón de la remisión del art. 43 del régimen de defensa de la competencia, que fija ese plazo en dos años". Agregó que ese "lapso transcurrió con creces entre el pronunciamiento de fs. 1350/1357 vta. (5 de mayo de 2004) y su revocación por la Corte Suprema de fs. 1573 (8 de mayo de 2007)" (ver resolución de fs. 1663/4 de los autos principales, punto 3 del voto del doctor Barreiro).

MARIA GUADALUPE ALEJIA RICCIARDI
ABOGADA
T° 65-F° 733 CPACF

ESTEBAN RIGHI
PROCURADOR GENERAL DE LA NACION

Procuración

Contra esa decisión, la representante del Estado Nacional -Ministerio de Economía y Producción- interpuso recurso extraordinario con sustento en la causal de arbitrariedad y en la errónea interpretación tanto de la sentencia de V.E. que revocó la del *a quo* y no ordenó dictar nuevo fallo, como de las leyes federales 22.262 y 25.156 - lo cual afecta la competencia del Poder Ejecutivo Nacional en la materia- y del Código Penal. También invocó la existencia de gravedad institucional (fs. 1701/7). Luego del trámite previsto en el artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, la impugnación fue denegada (fs. 1738/9) y la parte recurrente dedujo la presentación directa de fojas 65/69 de estas actuaciones, donde cuestionó la inadmisibilidad resuelta por considerarla una extralimitación en el ejercicio de las atribuciones de la cámara y una nueva inteligencia defectuosa del fallo de la Corte que menoscaba la cosa juzgada pues, a su criterio, el pleito había concluido al dictarse aquél.

II

Si bien la interpretación de la Ley de Defensa de la Competencia constituye materia federal dada la naturaleza de esa norma (Fallos: 307:2091; 324:3381, entre otros), ello no exime de cumplir con la adecuada fundamentación que exige el artículo 15 de la ley 48.

Al respecto, advierto que la cuestión que se intenta someter a conocimiento de V.E. carece de la crítica concreta y razonada de las consideraciones del *a quo* para juzgar extinguida la acción por infracción a la ley 22.262 con sustento en el precedente de Fallos: 325:1702, pues ese requisito no puede tenerse por acreditado con las meras referencias dogmáticas en cuanto a que la prescripción solo "puede aplicarse en tanto esté en trámite el sumario administrativo, pero no rige ... cuando la sanción ya fue aplicada" o mientras la resolución 101/03 "estaba siendo analizada con un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación" (ver fs. 32 vta.).

Asimismo, el planteo formulado en esos términos desconoce, como se juzgó en la sentencia apelada con cita de

jurisprudencia de V.E., prescripción -aunque un Alto Tribunal en el pedido de lado la doctrina sobre previo a todo trámite y ante la eventual extir 322:717; 323:68 y 1785

No c ingresar al análisis de 22.262, remite -como (Fallos: 300:712; 304: en virtud de los p fundamentos de la s precedente invocado, aplicadas.

En fundamentación sufici 316:2727; 317:373 y planteo debe ser dese

En la Corte en estas m susceptible de confi 314:544, entre otros,

En que luego de aquella pronunciamiento, p cuando -como lo se el dictado de una n dictamen al que re Cámara Federal de pues se limitó a d

S.C. R 884; L. XLIV.

Procuración General de la Nación

jurisprudencia de V.E., que procede la declaración de oficio de la prescripción —aunque una de las sancionadas la había introducido ante el Alto Tribunal en el pedido de aclaratoria de fojas 1581/3— y también deja de lado la doctrina sobre el orden público involucrado, su tratamiento previo a todo trámite y la suspensión del curso de la apelación federal ante la eventual extinción de la acción (Fallos: 305:652; 308:245; 322:717; 323:68 y 1785; 328:4274, entre muchos otros).

No obstante esa deficiencia y sin que esto importe ingresar al análisis de una materia que, aún regida por la ley federal 22.262, remite —como regla— a aspectos de derecho común y procesal (Fallos: 300:712; 304:596; 311:1960, entre otros) creo necesario señalar en virtud de los principios que gobiernan el instituto, que los fundamentos de la sentencia apelada lucen razonables a la luz del precedente invocado, de las constancias de la causa y de las normas aplicadas.

En consecuencia, ausente el requisito de fundamentación suficiente, con arreglo a la doctrina de Fallos: 314:1440; 316:2727; 317:373 y 442, entre otros, considero que este aspecto del planteo debe ser desestimado por V.E.

III

En relación al alcance del anterior pronunciamiento de la Corte en estas mismas actuaciones, si bien se trata de un agravio susceptible de configurar cuestión federal (Fallos: 311:2696; 312:1311; 314:544, entre otros), advierto que resulta igualmente improcedente.

En efecto, la representante del Estado Nacional invocó que luego de aquella sentencia del Alto Tribunal no debía emitirse nuevo pronunciamiento, pues el pleito ya había concluido. Sin embargo, aun cuando —como lo señaló el *a quo*— entonces no se dispuso expresamente el dictado de una nueva sentencia, ello surgía de los propios términos del dictamen al que remitió el fallo de V.E. que revocó lo resuelto por la Cámara Federal de General Roca sin expedirse sobre el fondo del asunto, pues se limitó a declarar la procedencia del remedio federal que había

MARIA GUADALUPE ALEMA RICCIARDI
ABOGADA
Tº 65-Fº 732 CPAC

planteado el Estado y no decidió sobre el mérito de las apelaciones de las empresas sancionadas contra la resolución administrativa, las cuales, de ese modo, recobraron vigencia. Por consiguiente, sin perjuicio de la mejor interpretación que V.E. pueda efectuar de su fallo, considero que en esa ocasión se aplicó en el *sub judice* la primera parte del artículo 16 de la ley 48 que prevé: "... cuando la Corte Suprema revoque, hará una declaratoria sobre el punto disputado, y devolverá la causa para que sea nuevamente juzgada ...".

Así descartada la existencia de la cosa juzgada que se alega, opino que la nueva sentencia que se pretende dejar sin efecto no configuró apartamiento alguno de lo antes resuelto en esta instancia, sino la declaración sobre la extinción de la acción por la infracción a la ley 22.262 imputada en autos, cuya subsistencia -cabe recordar- constituía un requisito previo a cualquier decisión sobre el fondo (Fallos: 322:300 y su cita; 329:2005, entre otros).

En cuanto a la invocación del precedente "Sanz", recién citado (Fallos: 329:2005) además de su extemporaneidad pues sólo fue introducido en la queja (ver fs. 68), estimo que carece de la pretendida pertinencia pues el apoderado del apelante ha omitido considerar -en lo que aquí interesa- que al intervenir por primera vez la Corte en ese proceso, la mayoría de los jueces declaró formalmente procedente el recurso y confirmó la condena, con lo cual -a diferencia del *sub examine*- cerró definitivamente la causa; mientras que los jueces que votaron en disidencia dejaron sin efecto la sentencia y, con fundamento en el artículo 16, primera parte, de la ley 48, ordenaron que se dicte un nuevo pronunciamiento (ver Fallos: 321:2848). Esa relevante circunstancia antecedente, indicativa de la existencia de cosa juzgada, fue valorada por la mayoría al dictar el segundo fallo y declarar inadmisibles el remedio federal basado en que la acción penal ya había prescrito cuando el Alto Tribunal confirmó la condena.

Esta inteligencia del caso no contradice la jurisprudencia del publicado en Fallos: 246:159, también citado tardíamente (ver fs. 68), pues en los precedentes de Fallos: 186:17 y

187:662 -cuya doctrina la firmeza de lo resuelto dejada sin efecto al no decidir indica que la atribución que reconocí, marca que se trató

Por *quo*- que la objeción tardía, pues la recurre de las providencias de la Cámara Federal de Ge de fs. 1601 y 161 temperamento adverso 315:739 y 1350, entre

A 1
asimismo, la inexistencia
Po
fojas 65/69.

S.C. R 884; L. XLIV.

Procuración General de la Nación

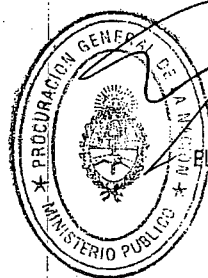
187:662 -cuya doctrina aplicó V.E. en esa ocasión- se había declarado la firmeza de lo resuelto con anterioridad a la sentencia de Cámara dejada sin efecto al prosperar el recurso extraordinario. Esa forma de decidir indica que la ausencia de reenvío respondió al ejercicio de la atribución que reconoce el artículo 16, segunda parte, de la ley 48 y, a la vez, marca que se trató de hipótesis opuestas a la de autos.

Por último, corresponde destacar -al igual que el *a quo*- que la objeción que se analiza también constituye una reflexión tardía, pues la recurrente guardó silencio luego de haber sido notificada de las providencias de fojas 1599 y 1607, por las que se integró la Cámara Federal de General Roca para dictar nueva sentencia (ver cédulas de fs. 1601 y 1610). Esta circunstancia concurre en abono del temperamento adverso anticipado (Fallos: 308:1175; 310:884; 314:1404; 315:739 y 1350, entre otros).

A mi modo de ver, lo hasta aquí expuesto demuestra, asimismo, la inexistencia de la gravedad institucional alegada.

Por ello, opino que V.E. debe desestimar la queja de fojas 65/69.

Buenos Aires, 30 de agosto de 2010.



EDUARDO EZEQUIEL CASAL

MARIA GUADALUPE ALELIA RICCIARDI
ABOGADA
Tº 65-Fº 733 CPACF

83

